

Reunió Zapatero – Rajoy

Carta de Batasuna

En la mateixa línia seguida fins ara damunt el “Pla Ibarretxe” (*Pàgines d’opinió nº 19 i 24*), els oferim les reaccions editorials dels principals diaris davant els darrers esdeveniments relacionats amb el tema: la reunió de dia 14 de gener entre el president del Govern, José Luís Rodríguez Zapatero, i el cap de l’oposició, Mariano Rajoy; i la carta oberta de Batasuna a Zapatero (que reproduï m íntegrament al final d’aquest document), oferint una via de diàleg i una solució al conflicte basc.

Esperanzador deshielo

ABC

EL resultado de la entrevista mantenida ayer en La Moncloa por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, envuelta en densas incertidumbres, otorgó a los españoles una estimable ración de tranquilidad.

La gran mayoría de la sociedad ha percibido con satisfacción que existe un cierto clima de entendimiento entre el Gobierno y la oposición, que representan al 80 por ciento de los votantes, en lo que concierne al rechazo absoluto a la viabilidad del plan Ibarretxe y a la apertura de un diálogo serio, formalizado a través de una comisión conjunta, entorno a las posibles reformas sobre la organización territorial del Estado.

Los últimos episodios de la interminable puesta en escena del desafío soberanista son fiel reflejo de la complicada posición en que se sitúa el Gobierno. Zapatero estuvo firme, sin duda, en la reunión del jueves con el lendakari; pero la simbología, esencial en la democracia, trasladaba la imagen de una confrontación de dos legitimidades enfrentadas.

En la misma línea se sitúa la recepción en el Congreso al presidente del Parlamento vasco, a pesar de las cautelas protocolarias y de la prudencia exhibida por Manuel Marín para solventar la difícil papeleta. Atutxa cumplió el objetivo nacionalista de solemnizar la entrega oficial del documento, cuando en rigor se trata de un simple trámite administrativo. Pero, sobre todo, transmitió una petición descabellada, rechazada de forma rotunda por Marín, acerca de la formación de una comisión bilateral para analizar el texto antes del Pleno que rechazará su toma en consideración. La eventual presencia de miembros de la ilegalizada Batasuna o del grupo parlamentario que debería estar disuelto (y no lo está por razones imputables al propio Atutxa) supone una propuesta abierta para devolver a Otegi y los suyos un protagonismo inmerecido. Es también una ofensa a las víctimas y a millones de ciudadanos que desean ver a ETA y a sus seguidores expulsados del lugar reservado a las personas honorables.

EN todo caso, el presidente de la Cámara de Vitoria ha dejado muy claro que el PNV busca la negociación «entre Euskadi y España», como ellos dicen, pretendiendo una confrontación imposible entre la parte y el todo, que es imprescindible desterrar del lenguaje político y mediático. Se le han dado excesivas facilidades a los nacionalistas para presentar en las máximas sedes del Ejecutivo y del Legislativo una opción que rechaza frontalmente la soberanía nacional, que, como bien dice la Constitución, «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Pero no pueden abrigar ninguna esperanza en cuanto al fondo del asunto: el Gobierno ha sido muy claro en su «no».

Más importancia tiene la entrevista de ayer entre Zapatero y Rajoy, representantes de esa voluntad del PSOE y del PP que el lendakari contrapone mediante una trampa dialéctica a la voluntad del pueblo vasco. Es digna de elogio la generosidad política que revela la oferta de pacto planteada por el líder popular. Hace tiempo que la sociedad exige a los dos grandes partidos de ámbito nacional que pongan freno a las exigencias desmesuradas de los grupos que sirven para completar mayorías parlamentarias. La negociación y el acuerdo, legítimos en toda democracia, no deben suponer una modificación de las reglas del juego, que tienen que quedar resguardadas de las circunstancias coyunturales. Hay un amplio margen para pactar alianzas en materia de inversiones o de políticas sectoriales. El PP ha presentado un «mapa de lo inamovible», ofreciendo una garantía de gobernabilidad y de estabilidad parlamentaria. Según este esquema, PP y PSOE conforman el núcleo duro del poder constituyente, que no sólo afecta a la reforma formal de la Constitución, sino también a los Estatutos de Autonomía y otras leyes vertebradoras del sistema.

A su vez, la propuesta de Zapatero, planteada como un pacto de «lealtad», siendo diferente en

aspectos importantes, puede reconducirse a un procedimiento de diálogo. Es evidente que sin el consenso del PP resulta imposible la reforma de la Constitución, pero también es fundamental que el principal partido de la oposición participe del acuerdo sobre reformas estatutarias que, en las circunstancias actuales, podrían ser aprobadas por las mayorías que el Gobierno ha formado con sus socios más o menos formales. Resultaría incoherente que el PSOE persistiera en el empeño de crear un «pseudobloque constitucional» junto con los nacionalistas, excluyendo al centro-derecha, que ha mostrado su clara voluntad de llegar a un entendimiento en asuntos de Estado.

Ayer lo hubo en La Moncloa, con un acuerdo que implícitamente tiene categoría de compromiso documental y que supera en jerarquía al lenguaje de los gestos en el que tan hábilmente se mueve Zapatero. Porque no es lo mismo centralidad que hacer equilibrios, como tampoco se puede confundir la flexibilidad con la ambigüedad.

La tentación sigue presente en algunas estrategias del equipo del jefe del Ejecutivo, pero el razonable resultado de la entrevista permite atisbar nuevas posibilidades. No hay que olvidar, en todo caso, que el Gobierno sigue apoyado en una mayoría que completa ERC (que ayer mismo avisó a Zapatero de que el acuerdo con los populares es incompatible con el firmado con los independentistas) y que el tripartito catalán plantea exigencias de imposible encaje con los criterios del PP. Consigue el Ejecutivo ampliar el principio de diálogo universal que caracteriza su forma de hacer política, pero debe tener presente que tarde o temprano tendrá que optar por planteamientos que son rigurosamente incompatibles.

Rajoy ha cumplido con su deber y ambos líderes han conseguido transmitir un mensaje de sosiego -al menos transitorio- en un debate cada vez más encrespado. Cada uno asume su responsabilidad, y en democracia la decisión la tomarán los electores en su día.

Oferta-trampa

ABC

Después de avalar con sus votos el inconstitucional y secesionista plan Ibarretxe, Batasuna pretende irrumpir en el debate político suscitado. El portavoz parlamentario de la ilegal Socialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi, ha mostrado su disposición a «acompañar» al presidente del Gobierno, en el caso de que apueste por una solución al «conflicto vasco», y aseguró que, desde sus filas, «no se está planteando un escenario independentista». En una carta dirigida a Rodríguez Zapatero dice abogar por un nuevo escenario en el que tengan cabida todos los proyectos, nacionalistas o no, a la vez que propugna una «desmilitarización multilateral del conflicto» y la excarcelación de etarras.

Asistimos a una oferta tramposa por parte de quien, gracias al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, se halla en una situación de extrema anemia política, únicamente vigorizada por los auxilios que le presta el PNV, como la negativa de Atutxa a disolver, como ha ordenado la Justicia, su grupo parlamentario en Vitoria. Puede sorprender que ahora Batasuna defienda una posición que resulta más moderada, desde la perspectiva separatista, que la que encabeza el PNV con EA. Pero no cabe dejarse embelesar ingenuamente. Su objetivo es hacerse con una apariencia de legitimidad que le permita concurrir a las elecciones autonómicas vascas, evitando su desaparición de la escena política y que los peneuvistas les fagociten buena parte de su tradicional caladero de votos.

Sin embargo, su propuesta, a estos efectos, es, además de tramposa, insuficiente, pues sólo la condena explícita de la violencia terrorista sería la condición necesaria para levantar la declaración de ilegalidad, una vez haya solventado sus cuentas con la Justicia. Mientras ETA no abandone el crimen y Batasuna no condene el terror y se aparte del delito, no es posible considerarlos como interlocutores políticos válidos. Con la tregua de ETA planeando sobre el ambiente que rodea al plan Ibarretxe, el guiño incompleto de Zapatero al mostrar su disposición

al «diálogo» con el frente abertzale si cesa el «ruido de las bombas y las pistolas» y condena la violencia es de una confusa oportunidad.

El jefe del Ejecutivo no debe escuchar unos cantos de sirena cuyo soporte de sinceridad es menor que la nada, como la experiencia acumulada ha demostrado. La memoria resulta esencial para evitar el ardid, toda vez que desde el Gobierno de la Nación ya se ha intentado el diálogo con las distintas patas del frente nacionalista, tanto en los ochenta como en los noventa. Y todas esas tentativas han resultado baldías y circunscritas a una trampa. En esta situación de debilidad, y cuando Batasuna aún es ETA y no se arrepiente de serlo, no se le puede otorgar un protagonismo que atentaría contra el orden constitucional y ofendería a la memoria de las víctimas del terrorismo, como ayer señaló Rajoy.

Zapatero ha de ser consciente de que no se puede contentar a todo el mundo a la vez, sobre todo cuando la materia en cuestión (la unidad de España que marca el precepto constitucional) está de por medio. Para hacer creíble su compromiso con el pacto suscrito con el PP anteayer, el jefe del Ejecutivo ha de mantener una posición nítida, ajustada al espíritu del Pacto Antiterrorista. Tan esperanzador es el resultado de la entrevista del viernes, que ahora no puede desandar el camino. Los españoles no entenderían que, en estas circunstancias, el Gobierno socialista estableciera acuerdos tácticos de corto alcance y se detuviera a escuchar la voz mentirosa de Batasuna, devolviéndole una presencia y un porte públicos que no le corresponden en virtud de su nefasto currículum. Tampoco debería Zapatero dejarse embaucar por un intento personal de convertirse en algo así como la piedra filosofal del asunto y el artífice único de la solución, que, por otra parte, tiene marcada su senda legal. Otegi le ha tentado, llamando a su vanidad y pidiéndole que sea el «Tony Blair español». Torpe alusión, por otra parte, pues olvida el batasuno que Blair ha suspendido tres veces la autonomía del Ulster. Ahora mismo lo está.

ETA y la memoria

ABC

La predisposición a la desmemoria siempre ha sido el principal aliado del nacionalismo vasco, incluido el que representa ETA. Si se tiene en cuenta este dato, puramente empírico, podrá valorarse el último comunicado de la banda terrorista en sus justos términos y así relativizar su alcance.

El propósito de la banda terrorista con su comunicado de ayer era sumarse a la sincronía nacionalista impuesta por el plan Ibarretxe y avisar al PNV de que su apoyo no es un cheque en blanco. Después de Ibarretxe, Atutxa y Otegi, faltaba ETA para completar el elenco del frente abertzale que ha propiciado el lendakari.

Desde el 30 de diciembre, nada de lo que emane de este frente nacionalista es o será ajeno a los intereses comunes de sus integrantes y era necesario, para consumo interno, que la imagen de convergencia quedara explícita, con un plan que abraza a todos, desde el PNV a ETA.

Sin duda, los terroristas también tienen presente el acoso del Estado, la situación in extremis de la izquierda abertzale y la posición de fuerza que ha adquirido el PNV en la comunidad nacionalista, gracias, por paradójico que resulte, a la debilitación progresiva de ETA.

Pero sería un grave error interpretar esta irrupción de ETA como un acto aislado de la ejecución del plan Ibarretxe. La motivación estaba descrita en la taimada invitación que le cursó Otegi a Rodríguez Zapatero para ser el Tony Blair español: convertir el proceso de soberanía abierto por el PNV -y con la aquiescencia de este partido- en un proceso de paz, de paz a cambio de soberanía. El plan lo pone el PNV y ETA la coacción.

La memoria, por tanto, debe hacer presentes ahora los intentos de 1989 y 1998, cuando se dialogó con la banda terrorista. También debe hacer presente el preámbulo del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que compromete a PP y PSOE para negar cualquier beneficio político al cese de la violencia, lo que incluye la oposición al plan Ibarretxe como obligación inherente a este acuerdo de Estado.

Y debe también recordarse que hoy Batasuna es una organización ilegal y que ETA ni siquiera ha anunciado una tregua indefinida. La respuesta del Gobierno socialista, similar a la del PP, ha sido la correcta al exigir a ETA el abandono de las armas y el cese de la violencia. Incluso cabría enumerar más exigencias, porque tras el fraude de 1998 sólo son admisibles actos inequívocos de desarme incondicional y entrega de los terroristas a la Justicia.

Parece evidente que, inmerso en la debilidad y con el fin de no perder su «presencia política», algo se está moviendo en el mundo abertzale. Con la sombra de una hipotética tregua planeando sobre el futuro, el Gobierno ha de ser muy cauteloso y debe saber medir bien los pasos que se dan al otro lado para preparar conveniente los suyos.

Acuerdo satisfactorio

El Correo

La reunión entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, ofreció ayer la imagen de diálogo y entendimiento que esperaba gran parte de la opinión pública española. El hecho de que los dos partidos que representan a una mayoría abrumadora de la ciudadanía sintonicen a la hora de afrontar el desafío soberanista y decidan crear una comisión conjunta para procurar acuerdos en materia autonómica y constitucional constituye una noticia de gran calado que aporta estabilidad política a un tiempo que se anuncia convulso por efecto del plan Ibarretxe.

El acuerdo alcanzado entre Rodríguez Zapatero y Rajoy -calificado por éste como muy satisfactorio- sitúa en un segundo plano las desavenencias que puedan manifestarse entre Gobierno y oposición al trazar la línea de contención frente a los propósitos del nacionalismo vasco. Ello dependerá, en gran medida, de la capacidad que demuestren socialistas y populares para conferir a su tarea común una dimensión más constructiva que meramente reactiva.

La defensa de la legalidad constitucional y el mantenimiento de los frutos del consenso sobre los que ha descansado hasta la fecha el edificio democrático español no sólo requieren que las dos formaciones llamadas a alternarse en el Gobierno aúnen sus esfuerzos frente a las amenazas de desbordamiento de los cauces constitucionales y de los equilibrios territoriales en la España autonómica.

Es preciso también que apuren las posibilidades de consenso para dotar al Estado de las autonomías de un marco de desarrollo reformador capaz de garantizar su estabilidad para las próximas décadas. El mayor triunfo del soberanismo sería que acabara infundiendo temores en la actitud política del PSOE y del PP hasta anular su disposición a cuantas modificaciones razonables y por consenso contribuyan a la puesta al día del marco constitucional y estatutario.

Como resultado de su postura coincidente, ambas formaciones deberían prever también las situaciones más delicadas a las que pudiera conducir el empecinamiento nacionalista. El Estado de derecho cuenta con instrumentos propios para asegurar el cumplimiento de las leyes. Pero la aplicación de los recursos de que dispone el Estado constitucional requiere que sean

administrados según criterios de proporcionalidad y de oportunidad respecto al desarrollo de los acontecimientos.

Sería aconsejable que, más allá de las diferencias expresadas en los últimos días, Gobierno y oposición fuesen capaces de concertar la gestión de cuantas iniciativas puedan preservar el principio de legalidad. De igual forma que Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fueron ayer capaces de hallar la síntesis respecto a sus posiciones de partida, será necesario que socialistas y populares perseveren en el esfuerzo unitario para aportar a la ciudadanía el necesario clima de seguridad y confianza frente a las incertidumbres que provoca el soberanismo.

Zapatero y Rajoy, a la altura de las graves circunstancias

El Mundo

Tras la sensación amarga dejada por la visita de un desafiante Ibarretxe a La Moncloa, la jornada de ayer ofrece una esperanza de que se cree una dinámica política que permita encauzar el desarrollo autonómico de acuerdo con los parámetros de consenso que han caracterizado el cuarto de siglo iniciado con la Transición.

La propuesta en forma de pacto de estabilidad que le presentó Rajoy a Zapatero y la contrapropuesta del Gobierno tienen muchos elementos en común. Los suficientes como para pensar que el proceso abierto ayer puede acabar culminando en un pacto en el sentido formal del término, o al menos en unos criterios de colaboración que se mantengan a lo largo de los próximos meses o incluso hasta el final de la legislatura.

Zapatero y Rajoy acordaron consensuar una respuesta común al desafío separatista vasco y crear una Comisión -integrada por miembros del PP, el PSOE y el Gobierno- que tratará todos los asuntos relacionados con la arquitectura institucional, desde la reforma de la Constitución hasta la modificación de los Estatutos de Autonomía, pasando por la financiación de la Sanidad.

En relación con el plan Ibarretxe, la coincidencia en su más rotundo rechazo no oculta las diferencias respecto de los mecanismos que plantea cada uno a la hora de hacerle frente. Rajoy acierta al insistir en que el Ejecutivo impugne el proyecto ante el Constitucional y en que la Fiscalía persiga a Atutxa por el delito de desobediencia por negarse a disolver SA, como ordena el Supremo. En otras divergencias puntuales, en cambio, la razón la lleva Zapatero, que defiende la admisión a trámite del plan Ibarretxe en la Mesa del Congreso y la derogación de los artículos del Código Penal que convierten en delito la mera convocatoria de un referéndum ilegal.

Y, sin embargo, lo esencial no es tal o cual medida, sino la dinámica de acuerdo -lo que Rajoy llamó ayer el «espíritu del 78»- que se ha restablecido entre los dos grandes partidos políticos frente al mayor desafío a nuestro modelo de convivencia desde el golpe frustrado de Tejero.

Enorme trascendencia y valor, en este sentido, tiene la coincidencia de Zapatero y Rajoy respecto de la necesidad de preservar el consenso que hasta ahora ha imperado en todos los asuntos relacionados con el diseño institucional de España. Concretamente, cabe destacar como especialmente positiva la decisión de que la reforma de la Constitución incluya elevar a dos tercios la mayoría necesaria para que el Congreso de los Diputados apruebe modificaciones estatutarias.

Porque si en las Cortes Generales se requiere una mayoría cualificada para sacar adelante asuntos de trascendencia relativamente menor -como la elección de los consejeros de RTVE o los vocales del CGPJ- tanto más debiera para la aprobación y modificación de los Estatutos de

Autonomía. Y lógicamente, aunque este nuevo criterio no pueda convertirse en legal previamente a que el proyecto de reforma del Estatuto catalán se remita al Congreso, es obvio que debiera aplicarse en dicha circunstancia, ya que ello permitiría al PP participar con una actitud constructiva y razonable. Le otorgaría una capacidad de bloqueo, que se cuidaría mucho de emplear, a no ser que estuviera de sobra justificado.

Zapatero y Rajoy han estado a la altura de las graves circunstancias que hoy afronta España. Ahora deben realizar un segundo ejercicio de responsabilidad y rebajar el nivel de agresividad que ha caracterizado sus discrepancias en las últimas semanas. Ello permitiría crear el clima de confianza necesario para que el importante paso que dieron ayer sea mucho más que una declaración de buenas intenciones.

Batasuna cambia de tono

El Mundo

La Mesa Nacional de Batasuna envió ayer una carta al presidente Zapatero, en la que afirma que no quiere «imponer» una solución unilateral del conflicto vasco a los no nacionalistas, que se compromete a respetar las reglas democráticas y que aceptará el resultado de un proceso de negociación entre los partidos vascos, aunque éste no conduzca a la independencia. Batasuna apela a Zapatero y le transmite que, si decide ser «el Tony Blair» español, contará con su respaldo para «acabar definitivamente con el conflicto».

Jamás Batasuna había utilizado un tono semejante, de suerte que si hubiera que juzgar esta carta por su literalidad, podríamos llegar a la conclusión de que las posiciones de la izquierda abertzale son más moderadas que las del PNV y las expresadas en el plan Ibarretxe.

Pero habría que mostrarse extraordinariamente cauto antes de celebrar el giro de Batasuna por muchas razones. En primer lugar, porque la ilegalización ha causado un profundo daño a este partido, que se encuentra ante la perspectiva de quedarse sin representación en el Parlamento vasco y con serios problemas financieros.

En segundo lugar, a la debilidad de Batasuna se suma la crisis de ETA, acorralada policial y políticamente. La banda armada se encuentra en una situación similar a la de 1998, cuando recurrió a la tregua para poder reorganizarse y engañar al Estado. Ahora ETA está incluso peor.

Y, en tercer lugar, los comunicados de ETA y su brazo político merecen muy poca credibilidad. Dirigentes de la banda manifestaron hace seis años a la BBC que su generación jamás volvería a coger las armas y, pocos meses después, la organización terrorista volvió a asesinar.

Todo ello justifica la cautela de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que ayer exigió a Batasuna una condena «explícita y contundente» de la violencia de ETA y una apuesta inequívoca por esas reglas democráticas que dice respetar.

En todo caso, el Gobierno de Zapatero está obligado a explorar esta nueva oportunidad y contará para ello con el mismo respaldo que, en circunstancias muy similares, prestamos al de Aznar.

Entre los cantos de sirena y los pies en la tierra

El Mundo

Zapatero respondió ayer en San Sebastián a la carta de Arnaldo Otegi en la que Batasuna expresaba al presidente que tiene la oportunidad de convertirse en el Tony Blair español. El jefe de Gobierno afirmó que no regateará «esfuerzos por la paz que quieren los vascos y todos los españoles» y tendió la mano a la izquierda abertzale.

Pero Zapatero fue muy claro: cualquier diálogo con Batasuna pasa por que «cese de una vez el ruido de bombas y pistolas» y por que Otegi «condene y rechace» la llamada lucha armada de ETA. El Gobierno, como afirmó anteayer Teresa Fernández de la Vega, exige un repudio «explícito y contundente» de la violencia.

Ello supondría verdaderamente un hito histórico y un gran paso hacia una solución del conflicto vasco, pero Batasuna jamás ha querido darlo. No lo hizo en 1998 cuando ETA declaró su tregua-trampa. Por ello, hay que mantener una gran prudencia y esperar a que los buenos deseos expresados por Otegi se concreten en algo más tangible.

Por otro lado, no sería la primera vez que ETA desautorizara a la dirección de Batasuna, por lo que habrá que esperar a conocer si la banda terrorista está dispuesta a conceder una nueva tregua y a renunciar a las armas.

Batasuna le pide en esa carta a Zapatero que tenga «la misma decidida actitud» que para retirar las tropas españolas de Irak. No es una comparación pertinente porque una cosa son las legítimas opciones en política internacional de un Gobierno democrático y otra, iniciar una negociación con una banda responsable del asesinato de 1.000 ciudadanos.

Dejando al margen el plan Ibarretxe y en cualquier hipotética negociación sobre el problema vasco, el Gobierno tiene que actuar con el máximo respeto a la legalidad, teniendo muy presente la memoria de las víctimas de ETA y siempre con el acuerdo del PP. No sólo porque, como ayer reconoció Zapatero, es «imprescindible» para abordar cualquier reforma sobre la Constitución y los Estatutos sino además porque así está tasado en el propio Pacto Antiterrorista.

Zapatero debería tener en cuenta también las palabras de Mariano Rajoy, que, desde su experiencia como ministro de Interior y desde su conocimiento de los contactos con ETA hace seis años, advirtió que es profundamente escéptico sobre los propósitos de Batasuna.

Tal vez, tenga razón pero, al igual que ya lo hiciera Aznar, es lógico que Zapatero no descarte que la nueva vía pueda abrir expectativas de solución a un conflicto enquistado desde hace décadas.

Han pasado muchas cosas en estas últimas 72 horas y hay que serenarse e intentar separar el grano de la paja, lo que es real de la fantasía. En este balance forzosamente provisional, lo que nos parece más importante es el acuerdo entre Zapatero y Rajoy para que los dos grandes partidos mantengan un consenso básico sobre las reformas en el modelo de Estado.

Ese entendimiento no ha gustado nada a ERC e IU, que ayer amenazaron con retirar su respaldo al Gobierno si éste pacta con Rajoy. Llamazares habló de «frentismo» mientras que un portavoz de los independentistas aseguró que el consenso con el PP implicaba «una tutela inaceptable» para su formación.

Las reacciones de ambos demuestran que PSOE y PP van por el buen camino. Ello resulta tranquilizador para los votantes de los dos partidos, que, a pesar de sus muchas diferencias, sí coinciden en la defensa de la Constitución y las libertades.

La trampa de la carta

El Mundo

La banda terrorista ETA hizo ayer público mediante un comunicado su apoyo al plan Ibarretxe y a la propuesta de negociación que Batasuna hizo al Gobierno de Zapatero en Anoeta el pasado mes de noviembre.

En otras palabras, ETA ha decidido confirmar la existencia de su estrategia concertada con su brazo político ilegalizado. Arnaldo Otegi se ha convertido en un fiel ejecutor de los pasos que le dicta Josu Ternera y éste, a posteriori, en el necesario convalidador. Atrás quedan las desautorizaciones y los tanteos. Ambos trabajan, con visible cálculo, en una vía que les permita rentabilizar el melón que el lehendakari se prestó a abrir.

Inmediatamente, la carta de ETA provocó la única reacción por parte de la mayoría de los grupos políticos y del Gobierno que cabía esperar, y es reclamar que sólo hay un comunicado que se pretende de los terroristas: el que anuncie el fin de la violencia y el abandono de las armas. Sin embargo, quien con más acierto definió el mensaje etarra fue el ministro de Defensa, José Bono, al advertir de que «no es una carta bomba, pero sí puede ser una carta trampa». Las reminiscencias de la tregua trampa de 1998 resultan tan inevitables como oportunas.

Porque en realidad, tras aquella experiencia, nada de lo que ETA pueda anunciar en un comunicado es creíble, ni siquiera el cese de la violencia, mientras sus palabras no vengan acompañadas por acciones concretas. Por hechos que tendrían que culminar, con una lógica irrefutable, en la desaparición final de la banda armada.

Nada hay en el comunicado de ayer que justifique considerarlo, como hizo ERC, una «contribución al fin de la violencia». De la misma manera, sigue sin haber motivo alguno para iniciar esa «dinámica de cocina interna», donde el coordinador de IU en el País Vasco pretende que el Gobierno español guise un acuerdo negociado con los terroristas.

A la luz de estas reacciones, resulta especialmente tranquilizador, esperanzador incluso, que las ofertas de Batasuna o, lo que es lo mismo, las de ETA, se reciban ahora en un contexto de acuerdo y mutuo apoyo entre Zapatero y Rajoy.

Comisión de la lealtad

El País

Los partidos que representan al 80% de los españoles están de acuerdo en abordar las reformas institucionales, en particular las de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, desde el entendimiento. De momento lo que hay es sólo la voluntad de acuerdo -que ya es mucho-, pues lo convenido es crear una comisión en la que se buscarán acercamientos para una actuación convenida. Es un efecto de la situación creada por el desafío que supone el plan Ibarretxe, que no sólo afecta al País Vasco, sino a la cohesión y viabilidad futura del Estado autonómico.

El presidente del Gobierno y el del primer partido de la oposición, que venían escenificando divergencias en el tratamiento del desafío soberanista, decidieron ayer dejar pasar a primer plano lo que comparten, el rechazo a ese reto y la defensa de los valores constitucionales, y

relativizar las diferencias, que seguramente subsisten, sobre la mejor forma de hacerle frente.

Rajoy es seguramente, de entre los dirigentes actuales del PP, el más receptivo al estilo y voluntad de acuerdo de Zapatero en relación a las cuestiones de Estado. Y viceversa: para hacer la misma oposición que hizo Aznar en su momento, Mariano Rajoy no vale. Se han juntado así, gracias al plan Ibarretxe, las condiciones para un entendimiento entre ambos dirigentes que permita una respuesta concertada a preocupaciones compartidas. Pero también se han creado las condiciones para un reconocimiento mutuo: de que la iniciativa corresponde al Gobierno socialista, por parte del PP, y de que el PP es un partido democrático no contaminado por taras congénitas, por parte del PSOE; uno reconoce la gravedad de la situación, y el otro, la estabilidad y la legitimidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno. Y se empieza a poner fin a un periodo de crispación que, según constatan las encuestas, la mayoría de los ciudadanos considera artificial e inconveniente; especialmente a la hora de hacer frente a la situación que abre el desafío soberanista.

Las reformas institucionales constituyen el eje del programa político del PSOE para la legislatura. Son asuntos para cuya culminación el Gobierno necesita el acuerdo del PP; de manera imprescindible para las reformas de la Constitución, y que sería muy conveniente para las de los Estatutos y la de la financiación autonómica. Zapatero ha conseguido asociar al PP a ese proceso; es decir, ha conseguido que el partido de Rajoy se decante por la colaboración y no por el boicoteo de cualquier reforma como vía para desgastar al Gobierno y provocar su fracaso. Rajoy, por su parte, ha conseguido que el Gobierno reconozca la conveniencia del acuerdo de los dos grandes partidos frente a eventuales desbordamientos de la fiebre reformista de los nacionalistas. Ello no afecta necesariamente a la política de alianzas del Gobierno, según reconoció Rajoy. Pero es evidente que la mera existencia de la comisión como cauce en el que plasmar respuestas conjuntas actúa como elemento disuasorio y preventivo de tales desbordamientos.

El principio de acuerdo está pendiente de desarrollo y concreción. A diferencia del Pacto de 1992 sobre ampliación de competencias de los Estatutos de las autonomías de régimen común, en todas las cuales gobernaba el PSOE o el PP, las principales reformas ahora previstas afectan a comunidades con fuerte presencia de partidos nacionalistas. Ello obligará a buscar un equilibrio en las medidas acordadas. Pero de momento, la satisfacción expresada por los dos principales líderes políticos españoles es compartida por muchísimos ciudadanos.

Pacto de San Sebastián

El País

El jefe de la oposición, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega emplearon palabras muy similares, tras la entrevista del primero con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para referirse a la carta abierta de Arnaldo Otegi al presidente del Gobierno: que Batasuna condene la violencia y ETA deje de matar, y luego ya se verá. La coincidencia sugiere un acuerdo implícito en no cerrar puertas del todo (esperar y ver), pero sin comprometerse. Ayer, en San Sebastián, Zapatero vino a decir lo mismo: que para que se escuche la voz de Otegi debe cesar la de ETA. La carta de Batasuna puede considerarse una versión algo más afinada de su planteamiento de Anoeta, en noviembre, con la diferencia de que la dirige a Zapatero; es decir, que el emplazamiento no es ya al resto del nacionalismo, sino al Gobierno socialista.

¿Por qué habrá dado este paso Otegi? Seguramente porque ha comprendido que lo que ahora más le urge, evitar la desaparición de su partido si no puede presentarse a las elecciones de mayo, no es algo que pueda conseguir el PNV, y ni siquiera es seguro que vaya a intentarlo. Tal vez haya también un factor psicológico: el rencor con que desde hace meses contempla la izquierda abertzale los movimientos del nacionalismo instalado para atraerse a los votantes de Batasuna al mismo tiempo que protesta por su ilegalización.

Pero si Otegi ha dado ese paso es también porque ahora, gracias a la ilegalización, existe la posibilidad de que los intereses del brazo armado (seguir en candelero) y los del brazo político no coincidan. Otegi no puede ignorar que ninguna oferta suya tendrá credibilidad, y ni siquiera será escuchada, mientras no vaya acompañada de un anuncio de retirada de ETA. Como cuando los jefes del Sinn Fein hicieron saber a Londres que el IRA quería dejar las armas definitivamente. Es decir: que ya no basta (después del experimento de Lizarra) con que Otegi diga que quiere la paz; hace falta que demuestre que es capaz de convencer a ETA de que abandone la violencia. Lo cual podría conseguir si se atrae el apoyo de los presos, mucho más numerosos que los activistas en libertad.

Mientras ETA no desista, su brazo político deberá seguir fuera de la legalidad. Y en esto hay acuerdo claro entre el PP y el PSOE. Incluso es posible que el entendimiento sobre esta cuestión favoreciese el alcanzado contra el plan Ibarretxe y por una concertación de cara a las reformas institucionales. Ese acuerdo ha sido mal recibido por los partidos nacionalistas, como era de esperar. Sin embargo, fueron los nacionalistas, o algunos nacionalistas, quienes más contribuyeron a que la opinión pública -cualquiera que sea el baremo para medirla: encuestas, opiniones en los medios, etcétera- presionara en favor de un acuerdo PP-PSOE frente a actitudes de las minorías nacionalistas percibidas como abusivas.

Frente a Ibarretxe en primer lugar, pero también en relación a desplantes de los aliados del Gobierno como el del anunciado y luego retirado boicot a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos. La irritación causada por tales desplantes dio alas a hipótesis nada deseables como un acuerdo PP-PSOE para modificar la ley electoral y reducir la capacidad de influencia de los nacionalistas en la política española. Cuando uno de los objetivos del sistema autonómico es precisamente favorecer la participación de los nacionalismos en las instituciones comunes.

Además, el principio de acuerdo PP-PSOE supone también la aceptación por parte del PP de la legitimidad del programa de reformas institucionales del PSOE. Lo cual no sólo es una garantía para que esas reformas, y en particular las de los Estatutos, prosperen, sino de que un eventual cambio de mayoría no implicará una rectificación o un intento de bloqueo del desarrollo de las nuevas competencias.

En su discurso de ayer en San Sebastián, seguramente el de más contenido desde que fue elegido presidente, Zapatero dejó claro que es posible aumentar los niveles de autogobierno si las reformas se hacen en el marco constitucional y con verdadera voluntad de consenso. Y para esto el entendimiento con el PP no sólo será "absolutamente conveniente", como dijo la vicepresidenta, sino, en la práctica, imprescindible.

Buena noticia para España

El Periódico

El pacto de Estado propuesto por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, al actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, presenta tres virtudes que aconsejan su inmediata

aceptación: refleja la sintonía de los dos grandes partidos nacionales en la defensa de la unidad de España y el marco constitucional, sirve de seguro de riesgos para actitudes de deslealtad por parte de los nacionalismos periféricos y, por último, pero no menos importante, garantiza a un Gobierno en minoría parlamentaria, como es el actual, la libertad plena para afrontar la defensa de los principios institucionales sin la espada de Damocles de una crisis parlamentaria.

Así lo ha entendido Zapatero al aceptar la creación de una comisión bilateral entre los dos grandes partidos nacionales para estudiar ese gran acuerdo, que no sólo blinde el modelo de estado definido en la Constitución, sino que, además, sea el instrumento básico para negociar, desde el mayor consenso posible, las reformas estatutarias y los sistemas de financiación autonómicos. De tener éxito el proyecto, significaría la vuelta al espíritu del 78, lo que, como proclamó el presidente del Partido Popular, sólo puede traer estabilidad y certidumbre a los españoles.

Es un éxito de Rajoy porque abre la puerta a un cambio necesario en las relaciones entre las dos principales formaciones políticas nacionales. Porque una parte del problema, insoslayable, es que los dirigentes socialistas se habían convertido en buena medida en rehenes de su política de alianzas. Los réditos de la gran operación de propaganda contra el anterior Gobierno de José María Aznar, ese «todos contra el PP» absolutamente desmesurado, devengan un lastre inevitable a la libertad de maniobra.

Más aún, cuando quienes actuaron de punta de lanza en la campaña de desgaste, la mayor de las conocidas en la reciente democracia española, contra el centroderecha español, fueron los republicanos catalanes de ERC, el entorno mediático de Izquierda Unida y los nacionalistas vascos.

Los mismos que ayer acusaban al Partido Popular de estar instalado en la intolerancia y en la crispación son los que se demuestran intolerantes y activos en la estrategia de la tensión. La palabras de Carod-Rovira y de otros miembros de su movimiento, reclamando la independencia de Cataluña y sosteniendo la amenaza del referéndum de Ibarreche con otra de la misma naturaleza, son la mejor imagen de las dificultades en que se encuentra Zapatero.

La salida del laberinto sólo podía estar, por lo tanto, en la decisión ayer adoptada. Por encima de los legítimos intereses de partido, prima el de la nación, que exige que los buenos deseos plasmados con la creación de la comisión no queden frustrados por estrategias u oportunismos electoralistas.

Un nuevo escenario

El Periódico

Pasan muchas cosas y muy deprisa. Las frases de anteayer de Ibarretxe han quedado viejas. Hay un nuevo escenario, tras el encuentro de Zapatero con Rajoy y la carta de Batasuna apostando por unas conversaciones de paz que acaben con ETA.

Rajoy fue a la Moncloa planteando un pacto de Estado contra el plan Ibarretxe que, además, permitiese bloquear toda reforma que no contase con su bendición. Zapatero sólo aceptó un pacto de lealtad y crear una comisión bilateral que estudie el cambio constitucional y los estatutarios. Este intento de comprometer al PP en esas reformas despertó, ya anoche, recelos en ERC, que advirtió que lo del PSOE y el PP no puede ser un pacto estable. Zapatero debe lograr que eso acabe en un consenso amplio entre todos.

Otegi, dejando de lado ya la independencia, propuso un pacto entre "nacionalistas y no nacionalistas" que haga que ETA deje las armas. Podría ser una oportunidad histórica. Pedíamos política de verdad y Zapatero, firme en la defensa de la legalidad pero respetuoso con los demás, la está propiciando. Rajoy y ERC deberían actuar ahora como estadistas, e Ibarretxe tendría que sumarse al nuevo escenario regresando a la vía constitucional.

Euskadi: cauta esperanza

El Periódico

Un comunicado de ETA en el que esta vez la banda no concluye con la amenaza habitual de continuar la lucha armada avaló ayer los últimos pasos que Otegi está dando para tratar de esbozar una vía negociadora que encare el fin de la actividad terrorista. A nadie escapa que ante la previsible derrota de una debilitada ETA, Batasuna intenta no quedar marginada de la dinámica desatada por el plan Ibarretxe ofreciendo una negociación democrática que permita la desaparición de la organización terrorista.

Pero ni el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni las otras fuerzas democráticas pueden darse por satisfechos con que ETA diga que es la hora de la palabras. La única respuesta que etarras y batasunas pueden obtener hoy por hoy es la de que deben renunciar a las armas. Quizá haya que esperar a oírlo, y es posible que llegue antes una oferta de tregua.

De lo que no hay duda es de que la izquierda aberzale busca asegurar la supervivencia política en una futura Euskadi sin violencia. Pero si quiere de verdad tomar parte activa en el nuevo escenario, no tendrá más remedio que anunciar el final de la violencia terrorista. Y el tiempo siempre corre en su contra.

La vía del diálogo

La Vanguardia

El presidente Rodríguez Zapatero, tras su entrevista con el lehendakari Ibarretxe, recibió ayer a Mariano ERajoy, líder del PP. La primera constatación, en medio del alarmismo desatado tras la aprobación por el Parlamento vasco del plan Ibarretxe, es que se recupera el diálogo institucional en temas de Estado entre los dos principales partidos españoles. Ambos políticos acordaron crear una comisión para acercar posturas sobre las reformas estatutarias, constitucionales y la financiación con voluntad de consenso. El Gobierno explicó que este cauce es complementario al diálogo abierto ya en ese ámbito con otras fuerzas.

Zapatero y Rajoy coinciden en el rechazo de fondo al plan Ibarretxe, pero discrepan en el método. Zapatero, que ha asegurado que mientras sea presidente no se aprobará el proyecto, ha optado por las vía parlamentaria al descartar recurrir al Tribunal Constitucional y dejar que sea el Congreso el que rechace el plan. La España plural de Zapatero prevé reformas constitucionales y estatutarias, pero dentro de las reglas del juego. Rajoy parece sumarse a esta lógica, en sintonía con las tesis mantenidas por Josep Piqué, superando el inmovilismo que marcó la segunda legislatura del presidente Aznar.

El talón de Aquiles del lehendakari, desde esta lógica, es el procedimiento que ha seguido. El

presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que depositó ayer el proyecto en el Congreso, ofreció a Manuel Marín una comisión de ambos parlamentos para acercar posiciones. Se trata de una oferta tardía: se propone en Madrid aquello que no se ha logrado en Vitoria. El lehendakari sabe que miente cuando dice que su plan ha sido aprobado "por la inmensa mayoría de los vascos" cuando logró sólo el aval del nacionalismo y reprodujo en el ámbito parlamentario la fractura de la sociedad vasca.

Ibarretxe ha intentado escudarse en el proceso abierto en Catalunya, pero desde el propio Gobierno central se ha recordado que la reforma del Estatut respeta los cauces y hace de la necesidad de consenso -dos tercios del Parlament- virtud. También el democristiano Duran Lleida ha dicho que ambos procesos "son completamente distintos". El lehendakari confunde y se confunde. La vía catalana se fundamenta en la tradición catalanista que no es trinchera de división interna sino punto de encuentro. Ibarretxe puede tomar el camino que quiera, pero sin caer en el error de sectores del nacionalismo español de meter en el mismo saco ambos proyectos.

Tiempo para la paz

La Vanguardia

El movimiento del sector abertzale radical, con la declaración de Batasuna en la que admite una renuncia táctica a la independencia para empezar a negociar desde cero, y el comunicado de ETA en el que se propone de forma insólitamente conciliadora negociar una desmilitarización "por ambas partes", ha disparado alguna esperanza de que podríamos hallarnos a las puertas de la tan anhelada solución al conflicto armado en el País Vasco.

Sin embargo, con ETA toda precaución es poca. Aunque el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se declaró el domingo dispuesto a dar una oportunidad a la paz, la experiencia nos dicta prudencia en todo lo referente a la banda armada. Máxime si tenemos en cuenta que ETA y su entorno se hallan en una situación desesperada.

La izquierda abertzale sabe que su supervivencia depende de que pueda presentarse a las elecciones previstas para el próximo mes de mayo. Peor es la situación de ahogo táctico en que se encuentra la organización terrorista, después de dos años de importantes detenciones en Francia y la presión de las familias de los 700 presos, que ven con preocupación un futuro más que negro para los suyos desde todos los puntos de vista.

El mundo abertzale radical precisa urgentemente una salida para sobrevivir, y lo único que percibe es un voraz PNV que espera ser el heredero del voto ilegalizado. De ahí que los dirigentes abertzales, acuciados por la necesidad, ofrezcan un pacto, algunos quieren calificarlo de a la catalana, con los no nacionalistas para romper la dinámica a la que están abocados, gracias sobre todo a la eficacia policial y a la ilegalización de Batasuna.

Por tanto, lo que ahora ocurre entraba dentro de lo previsible en el marco de las posibilidades más optimistas. Pero que nadie lance campanas a vuelo y ponga prisa en que se ofrezcan salidas a quien todavía no ha entregado un arma ni ha renunciado ni condenado la violencia. Por supuesto que es necesario no dejar pasar la ocasión para la paz, pero sólo a partir del momento en que se concrete cuándo y dónde se entregan las armas. De momento, esto no ha ocurrido.

Leer entre líneas

La Razón

La carta abierta de Batasuna al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contiene los suficientes elementos de confusión como para que sea preciso retomar el viejo ejercicio de «leer entre líneas», más propio de tiempos de dictadura y falta de libertad de expresión.

Es evidente que el redactor de la misiva, aunque lleva la firma de Arnaldo Otegui, ha tenido un cuidado exquisito en no vincular la supuesta oferta de diálogo con la premisa, a nuestro juicio imprescindible, del cese de la violencia y la entrega de las armas por parte de la banda.

Es más, se pretende que el Gobierno legítimo de España se avenga a una negociación en paralelo con ETA, en la que los terroristas y asesinos de un un millar de personas tratan de ponerse en pie de igualdad con los servidores del Estado que han dado, en demasiados casos, su vida en defensa de la libertad y en la lucha contra la lacra del terror.

No hay otra traducción posible a la expresión «desmilitarización multilateral del conflicto» y ya tenemos suficiente experiencia para dejarnos confundir por la semántica.

Cada uno en su estilo, tanto Zapatero como el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, han dado la única respuesta posible: la condena expresa de la violencia y fin del terrorismo, como condición previa a una propuesta de diálogo que, no lo olvidemos, procede de un grupo ilegalizado por la Justicia por sus vinculaciones demostradas con la banda etarra.

El resto de la oferta no es más que reconocer las generales de la ley. Es evidente que no se puede plantear un escenario independentista para la solución del conflicto porque ése es, precisamente, el origen y la causa del terrorismo vasco. Tampoco se puede pretender una solución unilateral nacionalista porque es, sencillamente, anticonstitucional.

Por lo demás, Otegui, o quien haya redactado el escrito, reincide en el mismo desafuero que el PNV al reclamar un derecho soberano exclusivo y excluyente, cuando la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, tal y como establece nuestra Carta Magna. Al final de la larga misiva y de las medias palabras, sólo se puede llegar a una conclusión:

Batasuna necesita regresar a la situación anterior a su ilegalización para poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas, pero, claro está, sin tener que romper públicamente con ETA.

Hay que concluir, pues, que la política seguida hasta ahora por los dos grandes partidos nacionales, firmantes del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, está dando los resultados apetecidos. Conviene perseverar.

Eta, más de lo mismo

La Razón

La semántica de los terroristas no parece haber engañado a nadie, salvo a ERC, a tenor de la respuesta unánime que, desde el Partido Popular a Izquierda Unida, pasando por el Gobierno y el PSOE, ha recibido su último y farragoso comunicado. La banda vuelve a sus planteamientos de siempre y envuelve su propuesta en la amenaza y el insulto. No hay ningún elemento que permita albergar un cambio de estilo y sólo se detecta una urgencia, la de que Batasuna pueda presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas. Pero si ETA pretendía confundir a los ciudadanos y favorecer la pretensión de su brazo político, ha hecho un flaco favor. El discurso etarra no sólo no renuncia a la violencia, sino que, además, no ofrece más salida a la situación que la aceptación de unos supuestos derechos nacionales vascos.

Es evidente que lo que el ministro de Defensa, José Bono, ha calificado de «carta-trampa», intenta explotar la esperanza que albergan todos los españoles de bien de que sea posible alcanzar el fin de la violencia. Por ello, y sin olvidar pasadas experiencias, es preciso insistir en el único camino posible: no hay nada que hablar con ETA mientras los pistoleros y sus cómplices no anuncien formalmente su renuncia a la violencia, entreguen las armas y se sometan al orden constitucional. A partir de ese momento, se pueden abordar cualquier tipo de propuestas, salvo la amnistía de los asesinos, expresamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

Carta abierta a Jose Luis Rodriguez Zapatero

Con ocasión de su visita a nuestro país, la Mesa Nacional de Batasuna quiere trasladarle su valoración sobre la actual situación política, al mismo tiempo que quiere hacerle un emplazamiento: hagamos todo lo que está en nuestras manos para situar el conflicto político y armado en una fase definitiva de superación.

Las raíces del conflicto

Usted, señor presidente, sabe mejor que nadie que el denominado conflicto vasco no es sino el espejo en donde se refleja la imposición de España como proyecto negador de los derechos nacionales de pueblos que, como el vasco, han sido objeto de maltrato permanente por parte del Estado que ahora usted gestiona. Usted sabe que el debate de «¿qué es España?», que se repite a lo largo de la historia, no es sino la constatación objetiva de la existencia de un falso equilibrio construido contra los pueblos del Estado desde posiciones autoritarias y militaristas.

La constante apelación al artículo VIII de la Constitución en los últimos días, por parte entre otros de su ministro de Defensa, no hace sino evidenciar la debilidad de un Estado que sólo es capaz de justificar su existencia desde la pura y simple amenaza militar.

Imágenes como las de la última Pascua Militar o la última declaración de la Conferencia Episcopal reproducen la imagen de una «España» reaccionaria y autoritaria incapaz de asumir los retos del futuro desde un esquema democrático. Esa «España» le tiene miedo a la libertad, señor Rodríguez Zapatero, esa «España» también nos hiela el corazón a los que aspiramos a construir la nación vasca desde un punto de vista socialista.

Represión versus solución

Son muchas las voces que le recuerdan a usted que su obligación es mantener engrasadas las cadenas de tracción de los mecanismos que el artículo VIII de la Constitución española pone en sus manos. Esa es la gran trampa en la que pretenden neutralizarle los amigos de Bush, los grandes manipuladores del 11 de marzo, los Legionarios de Cristo; en definitiva, los que saben que en ese escenario volverán a recuperar el poder en las próximas elecciones.

En este sentido, queremos mostrarle nuestra preocupación por la deriva que está tomando su actuación política cimentada en el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos, la proliferación de medidas judiciales y represivas que agravan la situación del conflicto.

Entendemos que no es éste el camino; es pues momento para los hombres y mujeres de Estado; es momento para elegir entre el pacto con los sectores más reaccionarios o elegir el camino de la democracia asentando y fortaleciendo las bases para un proceso de superación del conflicto.

Es posible construir la paz

Hace unas semanas Batasuna hizo pública una aportación que busca la resolución definitiva del conflicto político y armado que sufren nuestros respectivos pueblos. Nuestros votos en la Cámara de Vitoria buscan también el inicio de una dinámica de diálogo multilateral que culmine en un acuerdo satisfactorio para todos y todas.

Batasuna quiere, en este momento trascendental, emplazarle a usted como representante del pueblo español a hacer un ejercicio de simple naturaleza democrática: el respeto escrupuloso a lo que el pueblo vasco decida.

Señor presidente, créanos si le decimos que podemos llegar a comprender e incluso a compartir muchas de las inquietudes que usted, su gobierno o sus compañeros de partido tienen en torno al proceso de toma de decisión que le proponemos como solución al conflicto.

Señor presidente del Gobierno de España: Batasuna no está planteando un escenario independentista para la solución del conflicto. Batasuna plantea acordar las reglas democráticas que hagan posible un nuevo escenario donde todos los proyectos políticos tengan cabida, también el nuestro, socialista e independentista.

Señor presidente del Gobierno de España: Batasuna no está planteando un frente nacionalista vasco que imponga una solución unilateral del conflicto. Batasuna plantea un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, un acuerdo que debe contar con la adhesión y el respeto de las distintas sensibilidades existentes en el pueblo vasco. Y que debe ser refrendado, inevitablemente, por todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria.

Así pues, nuestro compromiso es nítido: ese proceso de decisión debe de ser acordado en tiempos, mecanismos y garantías de derechos por parte de todas o, en su defecto, la mayoría de las formaciones políticas de nuestro país.

Asimismo, y una vez de que dicho acuerdo sea alcanzado, se deberá abrir un proceso de negociación con el Estado que fije los términos para el respeto de dicha decisión.

Podemos asegurar que el día después de dicho acuerdo no supondrá ni la ruptura unilateral independentista ni la alteración de derechos básicos para ningún ciudadano o ciudadana, sea cual sea el ámbito de su adscripción nacional o identitaria.

Permítanos por último sugerirle que este proceso de acuerdo, para que sea integral y eficaz, debe conllevar también el inicio de conversaciones entre su Gobierno y la organización ETA para la búsqueda de un escenario de desmilitarización multilateral del conflicto, puesta en libertad de los prisioneros políticos vascos y el reconocimiento social de las víctimas.

Llamamiento a la responsabilidad

Señor Rodríguez Zapatero, tiene usted en sus manos la posibilidad real de iniciar un camino que permita solucionar definitivamente este conflicto histórico de naturaleza política. De usted depende que esa posibilidad fructifique o no. Sólo esperamos y deseamos que tenga con respecto a este tema la misma actitud decidida que ha demostrado en algunos posicionamientos en torno a la política internacional de su gobierno.

Sabe de sobra que en ese camino le seguirá su pueblo y sabe también que en el camino de las soluciones contará con la actitud responsable de Batasuna.

No necesitamos decirle que de no ser así, siempre se encontrará de frente con las ansias de existir y poder decidir del pueblo vasco y, por supuesto, de la izquierda abertzale.

Señor presidente, es la hora de los estadistas, es hora de reconocer a la nación vasca su derecho a decidir, pactando ese proceso de decisión entre todos y todas, sin exclusiones y sin vulneración de derechos alguna.

Orain herria, orain bakea (Ahora el pueblo, ahora la paz)

Euskal Herria,

14 de enero de 2005

Mesa Nacional de Batasuna